

Editorial

En los medios educativos oficiales, últimamente se ha hablado con insistencia de la preparación de Recursos Humanos para apoyar el desarrollo del país. Pretendemos aquí estudiar el contexto histórico en que se desarrolla esta preocupación, analizar las políticas educativas con que se implementa y examinar si consigue los objetivos que se propone.

Al principio del presente sexenio, el régimen tuvo que enfrentar una situación especialmente difícil.

Al diagnosticar la situación, se indicaba que los problemas más graves que tenía que enfrentar el país eran la inflación-recesión y la agudización del desempleo.

El régimen consideró prioritario activar la economía y tratar de controlar la inflación. Argumentaba que, de no detenerse la espiral inflacionaria, seguiría aumentando el desempleo.

Para reactivar la economía, se intentó ganar la confianza del país, especialmente del sector privado, con el objeto de propiciar las inversiones de capital. Asimismo, el régimen trató de sanear la situación financiera mediante la obtención de

préstamos internacionales (FMI), el retorno de capitales llevados al extranjero, y la recaptación y el fomento del ahorro interno, esto último mediante la reforma de ciertos procedimientos financieros.

Se intentó detener la inflación mediante el control del gasto público, aplicándolo más en actividades productivas y reduciéndolo en bienes y servicios sociales. Igualmente se intentó frenar la espiral inflacionaria mediante la reducción de la moneda circulante y el control de los aumentos salariales.

El control de los aumentos salariales se justificaba argumentando que no era importante un aumento nominal, sino que lo que interesaba realmente era el aumento del poder adquisitivo del salario, y la única forma de lograrlo era activando la producción y, de esta forma, generando más bienes para distribuir.

De ahí surgió el *leit-motiv* del régimen: “aumentar la producción y la productividad”, y también el programa de la “alianza para la producción”.

No se tomaron medidas directas contra el desempleo. Se suponía que al activarse la economía, desaparecería la agudeza del desempleo, al generarse nuevas fuentes de trabajo que absorberían la mano de obra desocupada, además de crear nuevos puestos.

Tal política tuvo repercusión en el sector educativo. Uno de los objetivos prioritarios en educación durante el presente sexenio ha sido “vincular la educación terminal con el aparato productivo”.

En la coyuntura política presente, la prioridad de este objetivo es evidente. Para aumentar la producción hace falta productividad, es decir, personal capacitado en todos los niveles: ejecutivos, técnicos medios, y operarios. Este personal capacitado podrá también encontrar plantas de trabajo, lo que automáticamente disminuirá el desempleo. Desde otro punto de vista, se añade que si el país cuenta con personal altamente calificado, disminuirá la dependencia tecnológica.

En razón de esta prioridad las autoridades educativas han tomado ciertas decisiones en torno a la educación superior, media, básica y capacitación industrial.

En las evaluaciones oficiales se consideraba que la educación superior se ha venido expandiendo de una manera irracional y anárquica, es decir, sin estar acorde ni con las necesidades regionales ni con las necesidades del desarrollo del país, con las correspondientes carencias de recursos humanos y financieros, deficiencias del sistema administrativo y deterioro de la calidad académica.

Ante esta situación, se ha pensado que es necesario “racionalizar” el crecimiento de la educación superior. Esta “racionalización” implicaría tres medidas: limitar el acceso a la educación superior de manera que sólo ingresen a ella los más aptos por vocación y preparación, reformar el currículum de acuerdo con las necesidades del “desarrollo” del país, y adecuar el número de egresados de cada área a las “necesidades reales” del país, para evitar el desempleo de profesionistas. Para implementar esta racionalización se institucionaliza el plan nacional de educación superior.

Aunado con lo anterior, está el proyecto de vincular la enseñanza media, tanto básica como superior, con el aparato productivo. Se ha dicho que hay cinco profesionales por cada técnico, cuando se necesitan cinco técnicos por cada profesional. Por lo tanto, las autoridades educativas se han propuesto reorientar y revalorar las carreras técnicas. Como parte de este programa, se tratará de reactivar las secundarias técnicas industriales, agrícolas, y pesqueras; se incrementará el número de preparatorias técnicas terminales y se crearán numerosos centros donde se impartan carreras profesionales técnicas de corta duración. Asimismo, para implementar estos programas se ha instituido el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.

Para complementar las medidas anteriores y formar cuadros bajos capacitados para la industria, se ha promulgado la Ley de Capacitación que, de alguna manera, se coordina con el programa de “Educación para Todos”. Mediante la capacitación y el adiestramiento que por obligación constitucional deben

proporcionar las empresas industriales a los obreros, se pretende que éstos actualicen y perfeccionen los conocimientos necesarios para desarrollar con más capacidad y eficiencia su actividad laboral. Esto deberá contribuir a proporcionarles, en el futuro, mejores oportunidades de empleo y, de esta manera, participar en el desarrollo económico del país; además de facilitarles un ascenso en la escala social.

Con estas políticas se está procurando que el sistema educativo se vincule al aparato productivo y contribuya al desarrollo nacional.

Sin embargo, surge la pregunta: ¿En qué forma y a cuál desarrollo está contribuyendo el sistema educativo?

El Centro de Estudios Educativos ha reflexionado sobre estas medidas y ha expuesto, en diversas publicaciones recientes, sus puntos de vista sobre estas políticas. Por lo tanto, nos limitaremos a presentar algunas consideraciones de tipo general.

Es indudable que con estas medidas, el sistema educativo quedará vinculado al aparato productivo, pero de una manera especial con el sector industrial moderno. De implementarse las medidas proyectadas, sobre todo las políticas previstas para la educación superior, se llegaría a una educación diferenciada y elitista al servicio de un sistema ocupacional a su vez segmentado y elitista, lo que significaría seguir aumentando la desigualdad en el ingreso y detener la exigua movilidad social que hasta ahora había permitido el sistema.

Con estas medidas se ha intentado abatir también el desempleo. Pero es claro que el número de egresados del sistema escolar es mayor que el número de los retenidos por el sistema ocupacional. De 1960 a 1970, el número de egresados (graduados y desertores), fue de 9 747 000, en tanto que el de retenidos por el sistema ocupacional, fue de 5 347 000, lo que significa que sólo encontró empleo un 55% de los egresados. Es decir, que irá aumentando el ejército de reserva ocupacional, por lo cual crecerán los requisitos educativos exigidos por los empleadores, lo que, a su vez, generará un proceso de devaluación educativa. Es decir que las políticas educativas por sí mismas no podrán evitar totalmente el desempleo de los egresados.

La cifras mencionadas son un argumento contra la teoría que sostiene que la educación, por sí misma, independientemente de la estructura económico-social, es un factor fundamental de desarrollo y movilidad social.

Las medidas emprendidas por las autoridades educativas podrían lograr los objetivos propuestos si éstos estuvieran integrados a una política económico-social orientada a un desarrollo más justo. Esto supondría, en primer lugar, la decisión firme y efectiva de orientar los recursos del país, especialmente los financieros, al servicio de las mayorías desposeídas. Estos recursos se podrían orientar hacia zonas y grupos deprimidos, para fomentar pequeñas industrias de productos básicos (no de lujo), vertebradas regionalmente, lo que les permitiría subsistir. Medidas de este tipo, contribuirán a abatir el desempleo y el subempleo, y a fortalecer el poder adquisitivo de estos grupos, con lo que podrían hacerse efectivas sus demandas de servicios profesionales y técnicos.

Orientada la educación a la satisfacción de una demanda de servicios tan ingente como la de los sectores mayoritarios del país, sería muy difícil pensar en el desempleo de los recursos humanos egresados del sistema escolar.

